

Procurar seguridad, renglón pendiente de gobiernos priístas

México, D.F., febrero 28 de 2011.- Luego de la confesión que hizo el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo, en el sentido de que presidentes de la República emanados del PRI, pactaron con el crimen organizado para conservar una “paz social” en México, Gustavo Madero Muñoz, urgió a que la tarea de procurar seguridad verdadera a los ciudadanos deje de ser un pendiente de las Presidencias de este partido, así como de sus gobernadores y alcaldes.

Sin embargo, dijo que a los del PRI parece no correrles prisa. El mejor ejemplo es el estado de México donde vemos que ocho de cada 10 elementos de seguridad, agentes de ministerio de público y custodios de CERESOS no pasan por controles de confianza. También esa entidad es de las pocas que no reporta información a la Plataforma México.

De ahí Madero externó la interrogante: “En esa entidad, ¿a quién defienden?”.

Informó que de acuerdo con datos públicos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los delitos que más lastiman a la población como el secuestro, se registran en mayor número en Durango, Chihuahua y Quintana Roo, entidades gobernadas por el PRI.

Por esta razón, pidió a los mandatarios estatales y autoridades municipales disminuir este flagelo.

En incidencias de violación, Chihuahua y Quintana Roo ocupan los primeros dos lugares a nivel nacional. Ambos, gobernados por el PRI. Mientras que en el caso del homicidio doloso por cada 100 mil habitantes, Chihuahua, Sinaloa y Durango registran el mayor número. Todas estas entidades gobernadas por el PRI hasta 2010.

El dirigente panista alertó que en el caso de los homicidios que pueden estar asociados al enfrentamiento entre grupos delictivos, los estados gobernados por el PRI presenciaron siete de cada 10 de los ocurridos en el país.

Además, dijo que a pesar de que las tasas delictivas más altas se encuentran en estados gobernados por este partido, las autoridades locales son las más proclives a dejar de ejercer los recursos derivados del Subsidio para la Seguridad Pública Municipal.

Lo más grave, detalló Madero Muñoz, es que las municipalidades con administraciones priístas dejaron de ejercer más de la mitad de los recursos que fueron transferidos, tanto para el equipamiento, profesionalización e infraestructura de las corporaciones locales, así como incentivar la participación ciudadana en la prevención del delito.